

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

ACTUACIÓN	SOLICITUD DE CAMBIO DE RADICACIÓN
SOLICITANTE	INVERSIONES POMPARO S.A.S.
PROCESO	VERBAL
PROCEDENCIA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 22 03 000 2023 00174 00
	INTERNO 2023 - 018
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 071
DECISIÓN	NIEGA SOLICITUD DE CAMBIO DE RADICACIÓN

Medellín, doce (12) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Se resuelve mediante el presente proveído, la petición de cambio de radicación formulada por la **SOCIEDAD INVERSIONES POMPARO S.A.S.**, quien actúa a través de apoderado judicial, respecto del proceso verbal identificado con radicado 05001 31 03 001 2021 00144 00, que actualmente cursa en el **JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, proceso con pretensión declarativa de resolución de contrato de promesa de compraventa promovido por la **SOCIEDAD VALLE CRISTAL S.A.S.**, en contra de la aquí solicitante y donde fueron acumuladas a la demanda inicial cuatro (4) más, presentadas por la señora **MAGDA EDID GIRALDO, DISTRIBUCIONES EL COSMO S.A.S.**, el señor **PEDRO JAVIER ALZATE GIRALDO** y **ELEVEN INDUSTRIAL PARK S.A.S.**

I. ANTECEDENTES

El apoderado judicial de la parte demandada dentro del proceso verbal con pretensión declarativa de resolución de contrato de promesa de compraventa, proceso que fue promovido por la **SOCIEDAD VALLE CRISTAL S.A.S.**, en contra de la **SOCIEDAD INVERSIONES POMPARO S.A.S.**, al interior del cual se presentaron cuatro demandas de acumulación y que se identifica con el radicado único nacional 05001 31 03 001 2021 00144 00, ha presentado ante

esta Corporación y con fundamento en el Código General del Proceso, solicitud de cambio de radicación, para que el asunto sea reasignado a un juez del distrito judicial de Medellín.

Aduce que se configuran en este caso varias situaciones para la procedencia de la solicitud así: (i) Presunta afectación de la independencia e imparcialidad del Juez y de los funcionarios del Juzgado; (ii) Presunta afectación de las garantías procesales en el trámite del proceso que puede reflejarse en vulneración del debido proceso y por los problemas de gestión que se han evidenciado en el trámite y, (iii) Presunta afectación de la seguridad personal de los intervinientes.

Luego de hacer un recuento cronológico de las actuaciones surtidas en el proceso, refiere que las irregularidades que se han presentado y que le sirven de sustento a la solicitud, consisten en que no aparecen en el expediente los memoriales que envió el apoderado judicial de la parte demandante los días 11 de marzo de 2022 *“solicitando corrección de la demanda”* y el 30 de septiembre de 2022 desistiendo de los acreedores hipotecarios; menciona que se dictó sentencia anticipada en la que el juzgado de conocimiento hizo afirmaciones que escapan a la realidad y olvidando que se encontraba en trámite un recurso de apelación frente a la decisión negativa de una alegación de nulidad propuesta por la demandada, recurso que luego prosperó, porque mediante auto de 25 de octubre de 2022, este Tribunal con ponencia de la Magistrada Dra. Piedad Cecilia Vélez Gaviria, declaró la nulidad de lo actuado en el proceso, con posterioridad a los autos admisorios de las demandas principal y de acumulación, luego de encontrar configurada la causal 8ª del artículo 133 del C.G.P., disponiendo tener a la demandada notificada por conducta concluyente de los autos admisorios de la demanda principal y las acumuladas, desde el día en que presentó la solicitud de nulidad.

Se pone de presente también, que el día 6 de octubre de 2022, se le presentaron a la apoderada judicial de la Sociedad demandada, profesional del derecho Leidy Johanna Zapata Correa, en su lugar de trabajo y de vivienda, en la Unidad Residencial POLARIS del municipio de La Estrella, *“dos individuos que se hicieron pasar por la organización delincuencia la OFICINA DE*

ENVIGADO, amenazándola, y obligándola a renunciar a el (sic) recurso de apelación.”, motivo por el cual ella procedió el día 10 de octubre de 2022, a renunciar al poder que le había sido conferido por el representante legal de Inversiones Pompano S.A.S., ya que temía por su vida y la de su familia, además, puso en conocimiento de la situación al titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, a través de correo electrónico que se remitió a su cuenta de correo electrónico personal institucional, ante lo cual el juzgado ordenó mediante auto de 10 de octubre de 2022, remitir la denuncia a la Fiscalía General de la Nación.

Se afirma en la solicitud para sustentar la petición de cambio de radicación, que la afectación del orden público en relación con la seguridad e integridad de los intervinientes hace referencia a lo ocurrido con la anterior apoderada de la demandada y se indica que *“fue el desmedido apuro del despacho y del apoderado de la parte demandante, de salir adelante y tener éxito en la (sic) pretensiones que llegasen a la penosa situación de amenazar a esta apoderada ZAPATA, situación está (sic) que este despacho no brinda seguridad alguna ni se tiene el equilibrio, en que además raya con la ilicitud de las actuaciones presentadas por el apoderado de la parte demandante, ya que los únicos que conocieron en su momento la dirección de la apoderada ZAPATA, fueron el Juzgado Primero de Oralidad de Medellín y el apoderado de la parte actora”* y que en la actualidad la Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando lo ocurrido.

Aduce la solicitud que, el día 10 de marzo de 2023, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín negó el recurso de reposición interpuesto frente al auto que autorizó notificar a los acreedores hipotecarios del auto de diciembre 7 de 2022 y decidió no conceder el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, haciendo afirmaciones en contra de la demandada como que torpedean la actuación proponiendo recursos sin tener legitimación para ello. Y agrega que, como otra irregularidad presentada, está el hecho que la señora Alba Iris Aguirre, acreedora hipotecaria se haya notificado del proceso a sabiendas que *“habían (sic) renunciado a los acreedores hipotecarios como aparece en el memorial del día 30 de septiembre de 2022, que no aparece en el link, ni hay rastro de este, notificada el día 13 de marzo de 2023.*

II. CONSIDERACIONES

1. Corresponde a esta Magistratura, conocer de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 31 del Código General del Proceso, por tratarse de un asunto que implica la posibilidad de remisión del proceso al interior de este mismo distrito judicial, pues la norma prescribe que los tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil: *“6. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 30.”*, en similar sentido se advierte, que se trata de una providencia que corresponde proferir al Magistrado Sustanciador por no estar este asunto enlistado en aquellos excepcionales casos donde se dictan providencias en salas de decisión; ello atendiendo al contenido del artículo 35 del C.G.P., norma según la cual *“Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El Magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión.”*

2. La figura del cambio de radicación de un proceso, pese a estar consagrada en el Código General del Proceso, no es definida por ese estatuto, empero puede decirse que es nueva en el procedimiento civil, la cual comporta de suyo, la intervención en uno de los aspectos del derecho fundamental al debido proceso, en la medida en que cambiar de radicación no es otra cosa que alterar el juez que conforme a la competencia debía conocer de un asunto, semejante variación debe ser por tanto excepcional, pues se trata de una afectación extraordinaria al principio de la *perpetuatio jurisdictionis*, según el cual ciertos derechos de las partes como los relativos a la competencia del juez que ha de decidir la *litis*, deben ser inmodificables; sin embargo, el propio legislador puede crear excepciones a esta regla procesal, como ocurre por ejemplo con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 30 del Código General del Proceso, norma que regula la competencia de la Corte Suprema de Justicia disponiendo que a esta Corporación le corresponde conocer *“8. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisión de un distrito judicial a otro. –El cambio de*

radicación se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. A la solicitud de cambio de radicación se adjuntarán las pruebas que se pretenda hacer valer y se resolverá de plano por auto que no admite recursos. La solicitud de cambio de radicación no suspende el trámite del proceso. –Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura...”.

Así mismo, en los artículos 31 numeral 6° y 32 numeral 5°, se facultan a las Salas Civiles y de Familia de los Tribunales Superiores para conocer de similar trámite al mencionado, cuando *“implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 8° del artículo 30”*.

Sobre este tópico ha tenido oportunidad de pronunciarse de forma reiterada y reciente la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, explicando que:

“... el referido instrumento se constituye en un resguardo para las partes, cuya finalidad es evitar que por factores externos al litigio cualquiera de las eventualidades previstas por el legislador entorpezcan el desarrollo ordinario en la conclusión de los conflictos llevados a la Jurisdicción, amén de las deficiencias relacionadas con el impulso de los procesos, que no deben confundirse con el contenido de las decisiones adoptadas en el mismo” (Auto AC5811-2021, Radicación nº 11001-02-03-000-2021-03252-00, del 7 de diciembre de 2021, Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque).

En dicha providencia, aludiendo a anteriores pronunciamientos de esa Corporación, explicó la Corte, que se trata de un mecanismo que:

(...) pretende resguardar el proceso de agentes externos capaces de perturbar su desarrollo, logrando así, que el funcionario judicial emita su veredicto alejado de circunstancias que puedan afectar su imparcialidad o que se conviertan en obstáculo para dispensar una recta, cumplida y eficaz administración de justicia.

El comentado instituto procesal se erige, entonces, en una objetiva excepción al principio de la competencia territorial fijada en el artículo 28

del Código General del Proceso, pues la alteración emanada de circunstancias sobrevinientes que imposibiliten, tanto el desarrollo normal del proceso y la observancia de las garantías fundamentales de las partes e intervinientes, como la imparcialidad e independencia del sentenciador, aconsejan variar el funcionario competente y la circunscripción judicial en donde se adelanta el juicio. (CSJ AC 4178-2017 de 30 de junio de 2017 rad. 2017-00860).

Lo anterior pone de presente que, para que proceda el cambio de radicación, es necesario que se acrediten por la parte solicitante, la existencia de circunstancias externas al proceso relacionadas con alteraciones del orden público o que afecten la imparcialidad o independencia del juez e implica que el proceso sea trasladado a una sede judicial diferente a aquella donde está el juez que asumió competencia en razón a las reglas de atribución de competencia procesales, lo que envuelve una afectación, permitida por la ley, al principio de la *perpetuatio jurisdictionis*, pero que, por lo mismo, debe ser excepcional y justificada.

Siendo como viene, la aplicación de esta figura excepcional supone una decisión razonable, proporcional y ponderada por parte de esta Corporación, que permita concluir si la medida a tomar tiene como finalidad proteger intereses o bienes jurídicos relevantes; es idónea para alcanzar la finalidad propuesta; es indispensable o necesaria; y finalmente, si es o no proporcionada a los hechos que le sirven de causa.

III. CASO CONCRETO

En el *sub lite* se tiene que por razones que pueden sintetizarse en inconformismo con la gestión que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín ha efectuado dentro del proceso identificado con radicado 05001 31 03 001 2021 00144 00, debido a las decisiones adoptadas, los argumentos y el lenguaje usado en las mismas, así como que no aparecen dentro del expediente, algunos memoriales; ello sumado a una situación que denunció la anterior apoderada judicial de la parte demandada según la cual fue amenazada para no interponer un recurso dentro del proceso, el apoderado judicial de la Sociedad Inversiones Pompano S.A.S. parte resistente dentro del

juicio, solicitó el cambio de radicación del proceso, para que sea remitido a un juez del mismo circuito judicial.

El solicitante en este caso enuncia varias situaciones que se presentaron durante el trámite que a su parecer justifican el cambio de radicación pretendido, así entonces, alega que no aparecen dentro del plenario los memoriales que envió el apoderado judicial de la parte demandante los días 11 de marzo de 2022 *“solicitando corrección de la demanda”* y el 30 de septiembre de 2022 desistiendo de los acreedores hipotecarios; la anterior situación además que no fue acreditada por la parte actora, porque contrario a lo que afirma, anexa a su solicitud el historial de actuaciones del proceso donde se evidencia que el despacho accionado relacionó los mentados memoriales tal y como puede observarse en la historia del proceso que se aportó como anexo en los folios 16 y 17 del archivo digital 03; de ser cierto que los memoriales no obran en el expediente, tampoco comporta un asunto que repercuta en la imparcialidad e independencia del juez, ya que como se advierte, los mismos se encuentran debidamente registrados como recibidos dando con ello transparencia al actuar del despacho judicial. Adicionalmente, llaman la atención del Tribunal las afirmaciones que se hacen en la solicitud en cuanto a que de dichos escritos no quedó rastro, cuando fueron aportados con los anexos de la solicitud de cambio de radicación y los mismos pueden observarse en el expediente arrimado, quedando por tanto sin peso que soporte la solicitud, las denunciadas deficiencias.

Aunado a lo anterior, a lo largo de su escrito, el solicitante menciona el contenido de algunas de las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito al interior del proceso allí radicado con el N° 2021 00144 00, señalando que con las afirmaciones hechas por el juzgado emerge nítida la afectación de la imparcialidad del funcionario judicial, empero este aspecto corresponde a una discusión relacionada con las decisiones del proceso y no con situaciones exógenas a éste, que son las que dan lugar al cambio de radicación, porque queda en evidencia que la inconformidad radica más en el sentido de las decisiones emitidas por el juzgado que conoce del proceso, que en un interés palmario del juez de conocimiento en decidir de determinada manera, lo cual no es motivo para el cambio de radicación; y dicho sea de

paso, muchas de ellas, no se advierten equivocadas si se tiene en cuenta la declaratoria de nulidad de lo actuado que declaró este Tribunal por parte de la Magistrada Dra. Piedad Cecilia Vélez Gaviria mediante auto de 25 de octubre del año inmediatamente anterior. Además, valga anotar que las discusiones sobre el contenido de las decisiones proferidas por el juez de la causa, tiene formas de contradicción al interior del proceso, no siendo una de ellas la solicitud de cambio de radicación, porque precisamente la legislación procedimental tiene consagrados por ejemplo los impedimentos y recusaciones cuando de advertirse alguna afectación a la imparcialidad se trata.

Sobre la improcedencia del cambio de radicación para discutir decisiones judiciales, puede consultarse el Auto AC5811-2021, del 7 de diciembre de 2021, Radicación nº 11001-02-03-000-2021-03252-00, Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, donde expone la Corte Suprema de Justicia:

“Por el contrario, se relatan vicisitudes endógenas, relacionadas con el decreto y práctica de las pruebas, especialmente atinentes a decisiones, omisiones y el comportamiento del funcionario de familia que la petente estima censurable y atentatorio de sus derechos y garantías procesales desde una perspectiva de género, los que dependiendo las circunstancias concretas tienen sus propios mecanismos correctivos, frente a los cuales el cambio de radicación no es una alternativa por la que la parte pueda optar a voluntad para sustraerle el conocimiento del asunto o instarlo a que proceda de una u otra manera”.

En similar sentido, en el auto AC5887-2021 del 10 de diciembre de 2021, Radicación N°11001-02-03-000-2021-04357-00 Magistrado ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO, dijo la referida Corporación:

“Este instituto supone, por su propia naturaleza, una perturbación grave, referida al lugar en que se ventila el asunto para el que se pide esa excepcional medida de protección, y que esa afectación sea externa al proceso y al desarrollo del mismo, así como no alude al defectuoso contenido, ni al desacierto de las decisiones judiciales que en él se hayan adoptado, ni a la inconformidad con el trámite que se le haya impreso, ya que para conjurar todas estas situaciones adversas el ordenamiento jurídico prevé otros mecanismos”.

Es que en cuanto a la posibilidad de acudir a los impedimentos y recusaciones cuando se advierta afectación a la imparcialidad del juez, también se ha referido la Corte Suprema de Justicia, para ello se cita el auto AC6048-2021,

del 15 de diciembre de 2021, Radicación nº 11001-02-03-000-2021-04579-00
Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde dijo la Corporación referida:

“Aún en caso de que tales denuncias efectivamente existieran, el proceso cuenta con su propio mecanismo de control para proteger la imparcialidad, como es el régimen de impedimentos y recusaciones, el cual consagra causal expresa de recusación en caso de denuncia penal o disciplinaria por hechos ajenos al proceso, bien sea contra el juez (art. 141 num. 7 C.G.P) o contra el secretario (art. 146 C.G.P).

Y en el ya citado, auto AC5811-2021 del 7 de diciembre de 2021, Radicación N° 11001-02-03-000-2021-03252-00 del Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque, sobre este tema dijo también la Corte Suprema:

“3.7 Finalmente, es necesario recordar que el proceso judicial contempla múltiples controles para su adecuado desarrollo, e incluso por fuera de él existen los mecanismos constitucionales, penales y disciplinarios a disposición de la parte que considera que se han vulnerado sus garantías, asumiendo desde luego las consecuencias de sus actos en estos escenarios.

Así por ejemplo, en punto a las decisiones y actuaciones cumplidas u omitidas, la ley procesal fija los mecanismos para recurrir con reposición y/o apelación, o solicitar su complementación, aclaración o corrección.

Y en lo que se refiere a la imparcialidad del juzgador, señala de manera precisa los motivos de impedimento y recusación, encaminadas a apartarlo del conocimiento de un asunto en el que confluyan determinados eventos que puedan afectar su recto juicio.

Y aunque pudiera aducirse, con razón, que las circunstancias denunciadas por la peticionaria tampoco encajan estrictamente con dichas causales, en tanto en esencia se refieren a un presunto trato revictimizante del funcionario a la hora de recibir la declaración de parte de Janeth Begonia Salamanca Rentería, ello no conlleva a que automáticamente quepan en la figura que se invoca en esta ocasión.

Lo que no quiere decir que no existan controles, pues, por ejemplo, amén de los recursos establecidos, la parte perfectamente puede pedir los correctivos constitucionales, penales y disciplinarios si es que considera que el funcionario le violó garantías fundamentales o incurrió en una conducta relevante en esos escenarios”.

Ahora, en cuanto a la situación que puso en conocimiento del juzgado la anterior apoderada que representaba los intereses de la parte demandada, según la cual fue amenazada para desistir de un recurso, advierte el Tribunal en ello varias situaciones que deben señalarse, en primer lugar, ningún sentido tiene que en tratándose de actuaciones judiciales relacionadas con un proceso

que se surte en un despacho judicial, se remitan escritos directamente al correo electrónico del funcionario que regenta el despacho, pues todos los despachos judiciales tienen habilitada una cuenta de correo electrónico a través de la cual se reciben los memoriales; en segundo lugar, pese a la manera en que fue remitido el escrito que se reitera, se hizo directamente llegar al correo institucional de la persona que funge como juez, procedió éste a ordenar la remisión de la denuncia ante la autoridad competente, esto es, la Fiscalía General de la Nación; y en tercer lugar, para lo que ahora interesa en relación con que tal situación justifica el cambio de radicación porque se puede afectar el orden público, pues la simple enunciación de lo acontecido no justifica acceder a lo que se pretende ya que no se demostró, ni siquiera se enunció en la solicitud, la relación que esta situación tiene con el trámite del proceso, pues se advierte incluso, que el proceso ha podido continuar su curso, contando la parte resistente con un apoderado que ha venido ejerciendo sus funciones y el cual no ha manifestado la ocurrencia de alguna intimidación o amenaza en su contra por la labor que despliega en el proceso en ejercicio de su profesión.

Se llama la atención en cuanto a los términos en que se redacta la solicitud, pues ella contiene afirmaciones carentes de prueba que indican que las amenazas de las que fue objeto la anterior apoderada de la parte demandada pueden provenir incluso del propio juzgado, semejante afirmación puede incluso comportar la comisión de una conducta penal.

Aunado a lo anterior, tampoco resulta procedente acceder a la solicitud, en tanto no se ajusta a la norma, pues el cambio de radicación que se está pidiendo, busca la remisión del proceso a otro juzgado del mismo circuito judicial, cuando la disposición normativa establece su procedencia para la remisión a otro juzgado dentro del mismo distrito, se insiste, no del mismo circuito.

En lo atinente a la necesidad de que la parte solicitante del cambio de radicación aporte las pruebas en que fundamenta su solicitud, también ha tenido a bien pronunciarse nuestro máximo órgano de decisión civil, así:

“2.7. Finalmente, se relieves, correspondía a la interesada suministrar evidencias de las irregularidades denunciadas para lograr la aplicación del artículo 30 del Código General del Proceso, pues la mera petición de cambio, por sí misma, carece de fuerza demostrativa.

El legislador, como no podía ser de otro modo, impuso a los interesados la carga de probar los supuestos de hecho, deber ineludible al preverse una definición de plano frente al pedimento “(...) de cambio de radicación[, al cual] se adjuntarán las pruebas que se pretenda hacer valer (...)”³.

En consecuencia, no se evidencia razón objetiva que autorice sustraer de sus atribuciones al juzgador implicado, al no haberse aportado prueba de la legitimación de la reclamante, así como de los motivos legales para pensar en el cambio deprecado” (Auto AC4097-2021 del 15 de septiembre de 2021, Radicación n.º 11001-02-03-000-2021-01267-00, Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona)

IV. CONCLUSIÓN.

Todo lo estudiado en precedencia, lleva a concluir la improcedencia del cambio de radicación del proceso aquí pretendido, porque las situaciones alegadas por la parte peticionaria no tienen las características que requiere la aplicación de la excepcional institución, lo que implica que se deniegue la misma.

Por lo expuesto, **el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en Sala Unitaria de Decisión Civil,**

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR el cambio de radicación solicitado por la **SOCIEDAD INVERSIONES POMPARO S.A.S.**, respecto del proceso verbal que se identifica con radicado único nacional 05001 31 03 001 2021 00144 00, que actualmente cursa en el **JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.**

SEGUNDO. ADVERTIR que contra esta decisión no proceden recursos.

TERCERO. COMUNICAR la decisión adoptada a la solicitante y al **JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica de conformidad con el artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5f021a2550c58ff901efd997b10ae7c0cb161640cbe540d271f3ea160cf9ebcc**

Documento generado en 12/05/2023 04:04:06 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>